



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
25 de octubre de 2017
Español
Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño

Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo a cuarto de Vanuatu*

I. Introducción

1. El Comité examinó los informes periódicos segundo a cuarto de Vanuatu (CRC/C/VUT/2) en sus sesiones 2238ª y 2240ª (véase CRC/C/SR.2238 y 2240), celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017, y aprobó las presentes observaciones finales en su 2251ª sesión, celebrada el 29 de septiembre de 2017.

2. El Comité acoge con satisfacción la presentación de los informes periódicos segundo a cuarto combinados del Estado parte y las respuestas escritas a la lista de cuestiones (CRC/C/VUT/Q/2/Add.1). No obstante, el Comité deplora que el informe se haya presentado con un considerable atraso, que impidió que examinara la aplicación de la Convención por Vanuatu durante 18 años. El Comité expresa su satisfacción por el constructivo diálogo celebrado con la delegación multisectorial del Estado parte, que se celebró con buenos resultados por videoconferencia, método adecuado habida cuenta de los limitados recursos del Estado parte.

II. Medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados por el Estado parte

3. El Comité observa complacido los progresos realizados por el Estado parte en diversos ámbitos, entre ellos la ratificación de instrumentos internacionales o la adhesión a ellos, en particular la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la participación de niños en los conflictos armados. El Comité toma nota con reconocimiento de las medidas legislativas, institucionales y de política adoptadas para aplicar la Convención.

III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6))

Recomendaciones anteriores

4. El Comité recomienda al Estado parte que tome todas las medidas necesarias con respecto a las recomendaciones que formuló en 1999 (CRC/C/15/Add.111) y que no puso en práctica por completo o suficientemente, en particular las relativas a la

* Aprobadas por el Comité en su 76º período de sesiones (11 a 29 de septiembre de 2017).



asignación de recursos presupuestarios (párr. 11), la formación y difusión (párr. 12) y los castigos corporales (párr. 16).

Legislación

5. El Comité acoge complacido el establecimiento de la Comisión de Derecho de Vanuatu y la reforma legislativa en curso. Sin embargo, observa con preocupación que no existe una completa ley de protección de la infancia, que algunas leyes aún tienen que ser armonizadas con la Convención, particularmente la Ley de Control del Matrimonio y el Código Penal, y que la Ley de Protección de la Familia de 2008 no se aplica plenamente.

6. **El Comité recomienda al Estado parte que:**

a) **Redoble sus esfuerzos por poner en práctica las revisiones de las leyes propuestas por la Comisión de Derecho de Vanuatu y ponga la legislación vigente en consonancia con la Convención;**

b) **Redacte un proyecto de ley sobre protección de la infancia, como se prevé en el Plan de Trabajo para la Protección de la Infancia de 2016-2017;**

c) **Tome prontas medidas para poner en práctica la Ley de Protección de la Familia de 2008 y para darla a conocer a la población.**

Política y estrategia integrales

7. El Comité acoge complacido la aprobación de la Política Nacional de Protección de la Infancia 2016-2026. Sin embargo, sigue observando con preocupación que no existen una estrategia nacional ni un plan de acción para la infancia y que diversas políticas centradas en el niño, como la Política Nacional para la Infancia 2007-2011, han dejado de tener vigencia y no se han revisado.

8. **El Comité recomienda al Estado parte que:**

a) **Asigne recursos adecuados para poner en práctica la Política Nacional de Protección de la Infancia 2016-2026;**

b) **Apruebe y ponga en práctica una completa estrategia nacional para el niño que abarque todos los ámbitos de la Convención y asigne recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para su aplicación.**

Coordinación

9. El Comité toma nota del establecimiento en el año 2000 del Comité Nacional de la Infancia. Sin embargo, observa con preocupación que ese Comité no ha venido funcionando plenamente desde 2012 y que no se han financiado varios puestos recientemente establecidos de funcionarios a nivel nacional y provincial dedicados a la atención del menor.

10. **El Comité recomienda al Estado parte que:**

a) **Proporcione al Comité Nacional de la Infancia los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para funcionar con eficacia;**

b) **Asigne gradualmente recursos financieros suficientes para financiar los cargos de funcionarios a nivel nacional y provincial dedicados a la atención del menor.**

Asignación de recursos

11. Con referencia a su observación general núm. 19 (2016) sobre la presupuestación pública para la realización de los derechos del niño, el Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CRC/C/15/Add.111, párr. 11) y recomienda al Estado parte que, de conformidad con el artículo 4 de la Convención, aumente en toda la medida de lo posible la asignación de recursos presupuestarios para la infancia cuando planifique su presupuesto futuro. En particular, debe aumentar el presupuesto y los gastos para la coordinación de la entidad encargada de la atención del menor que forma parte del Ministerio de Justicia y Servicios Comunitarios.

Reunión de datos

12. El Comité toma nota con reconocimiento del establecimiento, como parte de la Oficina del Primer Ministro, de la Dependencia de Seguimiento y Evaluación, del Sistema de Información Sanitaria y del Sistema de Información sobre la Gestión Educacional. Sin embargo, observa con preocupación que:

- a) No hay claridad en cuanto a la forma en que la labor de la Dependencia de Seguimiento y Evaluación está alineada con la de la Oficina Nacional de Estadística y al grado en que incide en la presupuestación y la planificación de la política del Estado parte;
- b) El Sistema de Información Sanitaria no incluye indicadores de nutrición del niño;
- c) El Sistema de Información sobre la Gestión Educacional únicamente hace un seguimiento de los niños que asisten a la escuela y no tiene en cuenta a los niños en edad escolar que no lo hacen. Tampoco hace un seguimiento de los niños con discapacidad ni dispone ajustes especiales en relación con el grado y la complejidad de la discapacidad.

13. **Habida cuenta de su observación general núm. 5 (2003) sobre medidas generales de aplicación de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:**

- a) **Estreche la coordinación entre la Dependencia de Seguimiento y Evaluación y la Oficina Nacional de Estadística y se asegure de que los datos reunidos se utilicen a los efectos de la planificación, la presupuestación y el seguimiento con respecto a la infancia;**
- b) **Amplíe los datos administrativos, especialmente en el Sistema de Información Sanitaria y el Sistema de Información sobre la Gestión Educacional, de manera de incluir indicadores clave para la infancia, debidamente desglosados por, entre otras cosas, edad, sexo, discapacidad, origen étnico, origen nacional, ubicación geográfica y condición socioeconómica;**
- c) **Refuerce el sistema de reunión de datos para que incluya datos cualitativos y cuantitativos sobre los niños, entre ellos los niños con discapacidad, especialmente a nivel provincial, y le asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes.**

Vigilancia independiente

14. El Comité toma nota de que se está considerando el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos. Sin embargo, observa con preocupación que no hay un cronograma para el establecimiento de una institución dotada de un mecanismo específico para la vigilancia de los derechos del niño que pueda recibir e investigar denuncias de niños y darles curso en una forma que tenga en cuenta sus necesidades.

15. **Con referencia a su observación general núm. 2 (2002) sobre el papel de las instituciones independientes de derechos humanos en la promoción y la protección de los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que:**

- a) **Tome medidas para establecer prontamente un mecanismo independiente de vigilancia de los derechos humanos dotado de un mecanismo específico para la vigilancia de los derechos del niño que pueda recibir e investigar denuncias de niños y darles curso en una forma que tenga en cuenta sus necesidades;**
- b) **Recabe cooperación técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.**

Difusión, capacitación y toma de conciencia

16. El Comité, si bien toma nota de la labor del Estado parte para dar a conocer la Convención a nivel nacional y comunitario, especialmente su asociación con organizaciones de la sociedad civil, dirigentes tradicionales e iglesias, recuerda sus

anteriores observaciones finales (CRC/C/15/Add.111, párr. 12) y recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce los programas, las campañas y las medidas destinadas a que la comunidad cobre conciencia de la Convención de manera que sus disposiciones y principios sean ampliamente reconocidos y conocidos y se asegure de que los niños, los padres, las comunidades y los dirigentes religiosos desempeñen una función fundamental en las iniciativas para ese fin;

b) Haga que se cobre más conciencia de la Convención en los planos nacional y local, especialmente entre los funcionarios de Gobierno que trabajan directamente en cuestiones de derechos del niño y entre las redes de la infancia, los padres y las comunidades;

c) Entable con las comunidades y los padres un debate sobre los derechos del niño, particularmente sobre cuestiones tales como el género, el matrimonio de niños y el trabajo infantil.

B. Definición de niño (art. 1)

17. El Comité observa con profunda preocupación que la Ley de Control del Matrimonio sigue fijando en 16 años la edad mínima para que las niñas contraigan matrimonio.

18. El Comité insta al Estado parte a que revise la Ley de Control del Matrimonio de manera de fijar en los 18 años la edad mínima para contraer matrimonio respecto tanto de las niñas como de los niños y a que tome todas las medidas necesarias para poner término al matrimonio de niños.

C. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)

No discriminación

19. El Comité observa que la Constitución del Estado parte establece la protección contra la discriminación por varios motivos. Le preocupa, sin embargo, que persista la discriminación de hecho y de derecho contra niños por motivos de género y de discapacidad.

20. El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas más activas para poner término a todas las formas de discriminación contra los niños, en particular las niñas y los niños con discapacidad.

Respeto por las opiniones del niño

21. El Comité observa con preocupación que no existen normas judiciales específicas para los procedimientos en que participan niños ni existe en el Código de Procedimiento Penal disposición alguna acerca del respeto por las opiniones del niño en las causas penales.

22. Con referencia al artículo 12 de la Convención y a su observación general núm. 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del niño en la familia, las escuelas y los tribunales y en todos los procedimientos administrativos y judiciales que les conciernan y, a esos efectos y entre otras cosas, apruebe legislación adecuada, que incluya la revisión del Código de Procedimiento Penal, e imparta formación a los profesionales que corresponda.

D. Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8 y 13 a 17)

Inscripción del nacimiento

23. El Comité observa que el Estado parte ha realizado algunos progresos en cuanto al alcance de la inscripción del nacimiento a través de la descentralización de los servicios de

inscripción, la prestación de servicios móviles y el fortalecimiento del Departamento de Registro Civil. Sin embargo, le sigue preocupando que haya diferencias en la inscripción del nacimiento según si el niño nace o no en un hospital. También le preocupa la exactitud de los detalles de la inscripción de los hijos nacidos fuera del matrimonio y los de madres adolescentes.

24. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Intensifique su labor para poner en práctica procedimientos de inscripción temprana del nacimiento y expedición de certificados de nacimiento, prestando especial atención a la inscripción de los nacimientos a nivel comunitario;

b) Logre que se inscriba un mayor número de nacimientos que no tienen lugar en hospitales y utilice en mayor medida equipos móviles de inscripción para llegar a comunidades remotas;

c) Inicie extensos programas para dar a conocer la importancia de inscribir el nacimiento y el proceso de inscripción;

d) Se cerciore de la exactitud de los detalles de la inscripción de los hijos nacidos fuera del matrimonio y los de madres adolescentes;

e) Formule estrategias para cambiar la imagen y la actitud negativa que tiene la sociedad respecto de las madres no casadas.

E. Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2), 34, 37 a) y 39)

Castigos corporales

25. Con referencia a su observación general núm. 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, el Comité insta al Estado parte a que:

a) Modifique la legislación vigente, en particular la Ley de Protección de la Familia y en el Código Penal, para prohibir expresamente los castigos corporales en todos los entornos;

b) Ponga en práctica inmediata y efectivamente la Ley de Educación, que prohíbe los castigos corporales en las escuelas, e imparta mayor formación a los maestros acerca de formas alternativas de disciplina y se asegure de que forme parte de los programas de formación antes del servicio y durante él;

c) Formule directrices para hacer cumplir la prohibición de los castigos corporales, de conformidad con la Ley de Educación, y actúe con decisión para someter a juicio a quienes las infrinjan;

d) Ofrezca programas para padres, maestros, agentes de policía y profesionales que trabajen con y para el niño a fin de alentar la utilización de formas alternativas y no violentas de disciplina;

e) Proporcione a los niños un mecanismo de quejas en las escuelas a fin de que puedan denunciar en condiciones de seguridad y confidencialidad a los maestros que sigan recurriendo a los castigos corporales a pesar de la prohibición;

f) Refuerce los programas de toma de conciencia, la formación y otras actividades para promover un cambio en el modo de pensar respecto de los castigos corporales, especialmente en las escuelas, en la familia y en la comunidad.

Malos tratos, descuido y abuso y explotación sexuales

26. El Comité toma nota de las modificaciones introducidas en la Ley núm. 17, de 2003, por la que se modifica el Código Penal, con respecto a la violencia sexual contra el niño. Sin embargo, sigue observando con profunda preocupación que:

- a) Según informes, hay un alto grado de abuso sexual, incluido el acoso sexual en la comunidad, que no se denuncia en todos los casos por el temor del estigma;
- b) Como resultado de los casos que se denuncian a los jefes de aldea para que los diriman puede ocurrir que se tomen medidas contra los niños víctimas o sus familias y no contra los autores;
- c) Los niños no tienen conocimiento suficiente de los mecanismos actuales de presentación de denuncias ni de las órdenes de protección;
- d) Las estructuras establecidas para apoyar a los niños víctimas de la violencia, como procedimientos judiciales especiales para escuchar testimonios, albergue y orientación psicológica, son insuficientes;
- e) Falta personal especializado y no hay una unidad policial especializada para los niños víctimas;
- f) Las Dependencias de Protección de la Familia se ocupan solo de casos domésticos que no sean de carácter sexual.

27. Con referencia a su observación general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia y tomando nota de la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, el Comité insta al Estado parte a que:

- a) **Fomente programas de la comunidad que apunten a prevenir y combatir la violencia doméstica, el maltrato de niños y la explotación sexual, prestando especial atención a la dimensión de género de la violencia;**
- b) **Tome todas las medidas necesarias a fin de instituir procedimientos judiciales especiales para escuchar el testimonio de niños víctimas de violencia y para que estos niños reciban servicios psicológicos y de recuperación, sepan que existen órdenes de protección y procedimientos judiciales especiales, entiendan los procedimientos para formular denuncias y se aliente a que se denuncien a las autoridades competentes los casos de violencia doméstica, en particular el abuso sexual de niños;**
- c) **Lleve a cabo actividades de toma de conciencia para luchar contra la estigmatización de los niños víctimas de explotación y abusos sexuales, incluido el incesto, y se asegure de que haya cauces de fácil acceso, confidenciales, aptos para los niños y eficaces para denunciar esas transgresiones;**
- d) **Tome todas las medidas necesarias para que las Dependencias de Protección de la Familia de la policía reciban recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, en particular personal especializado, para ocuparse de casos de violencia, abuso sexual y explotación de niños.**

Líneas de asistencia telefónica

28. El Comité observa complacido el establecimiento de la línea de asistencia telefónica para niños en Port Vila, que está disponible permanentemente como parte del programa de protección del niño en Internet. Le preocupan sin embargo la situación de los niños en el resto del país y el hecho de que no todos los niños saben que existe esa línea.

29. El Comité recomienda al Estado parte que:

- a) **Aumente la disponibilidad de líneas de asistencia, tal vez mediante la utilización de servicios móviles gratuitos;**
- b) **Haga que se dé a conocer la forma en que los niños pueden recurrir a la línea de asistencia y proporcione todos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento efectivo.**

F. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5, 9 a 11, 18 (párrs. 1 y 2), 20, 21, 25 y 27 (párr. 4))

Niños privados de un entorno familiar

30. El Comité observa con preocupación que no existen un marco jurídico, una política o una norma mínima para regular las modalidades alternativas de cuidado de niños y que la mayor parte de los niños objeto de estas modalidades están a cargo de parientes o de su familia ampliada en razón de la inexistencia de servicios de bienestar social. También preocupa al Comité que no existan mecanismos de seguimiento de las instituciones de cuidado alternativo administradas por organizaciones no gubernamentales ni del cuidado del niño en la familia.

31. El Comité, señalando a la atención del Estado parte las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, recomienda al Estado parte que:

- a) Establezca un marco jurídico, una política y normas mínimas para la supervisión del cuidado del niño en la familia y de las instituciones de cuidado alternativo administradas por organizaciones no gubernamentales;
- b) Establezca un sistema de hogares de acogida para los niños que no pueden vivir con sus familias y vele por que la institucionalización constituya un último recurso;
- c) Proporcione todos los servicios de bienestar social y el apoyo necesarios a las familias y a quienes proporcionan cuidado alternativo;
- d) Establezca normas de calidad para todas las modalidades existentes de cuidado alternativo y tenga en cuenta las opiniones del niño en las decisiones que se adopte al respecto;
- e) Se asegure de que se examinen periódicamente todos los casos de colocación de niños en hogares de acogida e instituciones y se supervise la calidad del cuidado en ellos, entre otras cosas ofreciendo cauces accesibles para la denuncia y el seguimiento de casos de maltrato de niños y para rectificarlos.

Adopción

32. El Comité acoge complacido los progresos realizados en la tarea de agilizar el proceso de adopción formal. Sin embargo, observa con preocupación que:

- a) Aún no se ha revisado la Ley de Adopción de 1958;
- b) En muchos casos los niños son adoptados por su familia ampliada o por miembros de la misma comunidad a través de arreglos informales (*kastán*);
- c) No existen directrices adecuadas para el proceso de adopción y no se exige una verificación por parte de la policía del país de origen de los padres adoptivos para completar el proceso administrativo en los tribunales, lo que puede tener como resultado la venta o la trata de niños.

33. El Comité insta al Estado parte a que:

- a) Agilice la revisión por la Comisión de Derecho de Vanuatu de la Ley de Adopción de 1958 y apruebe sin dilación una completa reforma del derecho de familia;
- b) Establezca normas y directrices para todas las partes interesadas en las cuestiones de adopción;
- c) Establezca una dependencia que supervise los procesos de adopción formal y se ocupe, entre otras cosas, del enlace con los organismos de adopción de niños de otros países en casos de adopción internacional y le asigne recursos suficientes;
- d) Haga que se cobre más conciencia de la adopción formal a nivel de la comunidad y promueva y aliente la adopción formal dentro del país;

e) Establezca mecanismos de intervención y supervisión respecto del sistema de adopciones informales (*kastán*) en el seno de la familia ampliada;

f) Considere la posibilidad de ratificar el Convenio de La Haya de 1993 relativo a la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.

G. Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 3), 23, 24, 26, 27 (párrs. 1 a 3) y 33)

Niños con discapacidad

34. El Comité toma nota del proceso de consulta que se está llevando a cabo respecto de la política integradora de discapacidad, la redacción del proyecto de ley sobre discapacidad y la Política y Plan Estratégico de Educación Integradora 2010-2020. No obstante, observa con preocupación que:

a) No existe una ley independiente ni una completa política sobre la protección y promoción de los niños con discapacidad;

b) En razón de actitudes culturales y de la sociedad se estigmatiza a los niños con discapacidad;

c) El acceso a la educación integradora es reducido, faltan docentes especialistas con buena formación y el acceso a transporte, espacios públicos y servicios en todas las zonas, especialmente las escuelas y comunidades rurales, es reducido;

d) El acceso a programas de rehabilitación, identificación temprana y remisión a servicios es limitado, y también lo son los fondos y el apoyo técnico para quienes prestan servicios y para las familias de niños con discapacidad.

35. Con referencia a su observación general núm. 9 (2006) sobre los niños con discapacidad, el Comité insta al Estado parte a que adopte un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, formule una completa estrategia para la integración de los niños con discapacidad y:

a) Refuerce el marco legislativo con la adopción del proyecto de ley de discapacidad y la aplicación de la Política Nacional de Integración de la Discapacidad para el Desarrollo 2016-2025;

b) Establezca y apoye programas y campañas en la comunidad para hacer frente a la discriminación y el estigma contra los niños con discapacidad y crear conciencia de las intervenciones y la detección temprana;

c) Se asegure de que haya un número suficiente de maestros y profesionales especializados que proporcionen apoyo individual en todas las escuelas y de que reciban formación adecuada para que todos los niños con discapacidades de toda índole puedan efectivamente disfrutar, incluso mediante la cooperación internacional, de su derecho a una educación integradora de buena calidad;

d) Mejore el acceso a todos los edificios y espacios públicos, así como la prestación de servicios y el transporte en todas las zonas, especialmente en las comunidades rurales;

e) Amplíe los programas de rehabilitación en la comunidad, identificación temprana y remisión para niños con discapacidad y proporcione el apoyo humano, técnico y financiero necesario a quienes prestan servicios a los niños con discapacidad y a las familias de estos.

Salud y servicios de salud

36. El Comité toma nota de la iniciativa de 2011 para una isla saludable, las directrices para la alimentación de la madre, el bebé y el niño pequeño, las directrices para el manejo integrado de la malnutrición aguda y el plan de utilizar aviones no tripulados para el envío oportuno de vacunas. No obstante, el Comité observa con preocupación que:

- a) Las tasas de mortalidad de bebés y menores de 5 años de edad como consecuencia de las condiciones neonatales y de causas prevenibles, como defectos al nacer, diarrea, malaria y neumonía, son elevadas;
- b) El alcance de la inmunización, especialmente en zonas rurales e islas exteriores, es limitado;
- c) Se observan retraso en el crecimiento, peso inferior al normal y malnutrición, que es una de las causas más importante de la muerte de niños en el Estado parte;
- d) El índice de amamantamiento exclusivo durante los tres primeros meses es bajo;
- e) Las instalaciones para la atención del niño, en particular las instalaciones obstétricas de atención neonatal son inadecuadas, lo que se debe a la falta de fondos, a que el número de trabajadores de la salud para niños y mujeres embarazadas que hayan tenido una buena formación es insuficiente y que faltan servicios de atención de la salud, especialmente en zonas rurales y remotas, todo lo cual interpone grandes obstáculos al mejoramiento de la salud del niño.

37. Con referencia a su observación general núm. 15 (2013), sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y tomando nota de la meta 3.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, el Comité recomienda al Estado parte que:

- a) **Tome medidas para reducir la mortalidad de recién nacidos y de niños menores de 5 años como resultado de patologías neonatales y de enfermedades prevenibles, como la neumonía, la malaria y la diarrea;**
- b) **Aumente la inmunización, especialmente en las zonas rurales y las islas exteriores, haga inversiones suficientes en tecnologías adecuadas, como el envío por aviones no tripulados, y aumente la capacidad de recursos humanos para los servicios de inmunización;**
- c) **Haga frente a la malnutrición crónica y al retraso en el crecimiento de conformidad con las nuevas directrices para el manejo integrado de la malnutrición aguda;**
- d) **Siga tomando medidas para promover el amamantamiento, como hospitales amigos del bebé, y aliente a las madres a aplicar las prácticas recomendadas de alimentación del bebé y el niño pequeño y las nuevas directrices sobre alimentación de la madre, el bebé y el niño pequeño;**
- e) **Se asegure de que existan instalaciones adecuadas para el tratamiento del niño y un número suficiente de trabajadores de la salud para el niño y la mujer embarazada que tengan una buena formación, especialmente instalaciones obstétricas de atención neonatal, en las zonas rurales en particular;**
- f) **Redoble sus esfuerzos por mejorar la obtención de servicios básicos de atención de la salud para todos los niños, especialmente en zonas rurales y remotas, y proporcione más recursos a los dispensarios móviles a fin de que estén disponibles con más frecuencia y presten servicios a una población mayor;**
- g) **Ponga en práctica y aplique las orientaciones técnicas del ACNUDH sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de políticas y programas destinados a reducir y eliminar la mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores de 5 años (A/HRC/27/31).**

Salud mental

38. El Comité observa con preocupación que ha finalizado la vigencia del Plan y la Política Nacionales de Salud Mental de 2010, pero no se ha formulado otra política o plan de acción sobre la salud mental del niño. Le preocupa también que el número de personal especializado en cuestiones de salud mental del niño sea insuficiente.

39. El Comité recomienda al Estado parte que evalúe la Política Nacional de Salud Mental 2009-2015 cuya vigencia ha terminado, así como el plan de acción que la acompaña, y utilice las conclusiones de la evaluación para formular una nueva política. Recomendamos también que el Estado parte tome todas las medidas que sean necesarias, a través de la cooperación regional, por ejemplo, para aumentar la capacidad y el número de personal especializado en cuestiones de salud mental del niño.

Salud de los adolescentes

40. El Comité observa con preocupación que:

- a) El número de embarazos y de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes es elevado;
- b) En los programas de educación sexual no se presta suficiente atención a todos los aspectos de la prevención;
- c) El aborto sea un delito penal que no admite excepciones en casos de violación o incesto y que esta prohibición hace que las adolescentes recurran a abortos peligrosos con el consiguiente peligro para su vida y su salud;
- d) Las adolescentes tienen un acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva que sean seguros, especialmente en las zonas rurales y las islas exteriores, así como un acceso limitado a métodos anticonceptivos, lo que obedece también al temor a la estigmatización;
- e) Existen actitudes culturales y creencias religiosas negativas con respecto a la utilización de preservativos;
- f) No existe una política o un plan de acción sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso indebido de sustancias adictivas entre los adolescentes y los programas y servicios a disposición de los afectados son escasos.

41. Con referencia a su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:

- a) Adopte una completa política de salud sexual y reproductiva para los adolescentes que preste atención a todos los aspectos de la prevención, con inclusión de las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo temprano;
- b) Se asegure de que la educación en materia de salud sexual y reproductiva forme parte del programa de estudios obligatorios para niñas y niños adolescentes, centrando especialmente la atención en la prevención del embarazo temprano y de las infecciones de transmisión sexual;
- c) Legalice el aborto en casos de violación, incesto y otros embarazos no deseados y ofrezca servicios de aborto no peligroso y de atención después del aborto, sea este o no legal. En las decisiones relativas al aborto habrá siempre que escuchar y respetar las opiniones de la niña;
- d) Ofrezca a las adolescentes mejores servicios de atención de la salud reproductiva y conexos y preste mayor apoyo a los servicios de planificación de la familia y salud reproductiva, especialmente en las zonas rurales;
- e) Redoble los esfuerzos por hacer frente a las creencias religiosas y culturales negativas sobre el empleo de preservativos y ofrezca métodos anticonceptivos asequibles;
- f) Formule una política y un plan de acción sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso indebido de drogas por niños y adolescentes, les proporcione información precisa y objetiva y conocimientos prácticos sobre la prevención del uso indebido de sustancias adictivas, como el tabaco y las bebidas alcohólicas, y establezca servicios, que estén al alcance de los jóvenes y tengan en

cuenta sus necesidades, para tratar la farmacodependencia y paliar los efectos perjudiciales.

Los efectos del cambio climático en los derechos del niño

42. El Comité observa complacido la incorporación en el programa nacional revisado de estudios de los conceptos de gestión del riesgo de desastre, adaptación al cambio climático y energía. Le preocupa, sin embargo, que el Estado parte no haya tomado aún medidas suficientes para incorporar plenamente la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el programa de estudios escolares, no haya establecido un completo sistema de protección social que tenga en cuenta los desastres, no se esté haciendo lo suficiente para incluir las necesidades especiales de los niños, entre ellos los niños con discapacidad, en la planificación de la reducción del riesgo de desastres, la preparación para ello, la respuesta y la recuperación y que la infraestructura escolar, especialmente en las zonas remotas, no sea resiliente y de fácil acceso en caso de desastre natural.

43. **El Comité señala a la atención del Estado parte la meta 13.b de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. En particular, recomienda al Estado parte que:**

a) **Aplice en el próximo año lectivo el programa nacional revisado de estudios, incluya en el programa de estudios escolares la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres y establezca en las escuelas programas tales como sistemas de alerta temprana;**

b) **Formule un completo sistema de protección social que tenga en cuenta los desastres y se asegure de tener en cuenta los factores especiales de vulnerabilidad y las necesidades especiales de los niños, así como sus opiniones;**

c) **Revise los protocolos de emergencia para incluir la asistencia y el apoyo de otra índole a los niños con discapacidad en casos de emergencia y desastres naturales;**

d) **Haga que los niños cobren mayor conciencia del cambio climático y los desastres naturales y estén mejor preparados para ellos y aumente la seguridad física y la resiliencia de la infraestructura escolar;**

e) **Asegure el acceso a las escuelas afectadas o que probablemente hayan de ser afectadas por graves fenómenos climáticos, especialmente las de comunidades remotas o rurales, y considere modalidades alternativas de enseñanza;**

f) **Mejore los datos y las evaluaciones a fin de establecer una base empírica para la reducción del riesgo y la preparación para desastres, especialmente en relación con las necesidades y prioridades especiales de los niños con discapacidad.**

Nivel de vida

44. Preocupan al Comité la pobreza infantil y las disparidades entre las provincias en lo que respecta al acceso a vivienda, educación, agua, alimentación y salud.

45. **El Comité señala a la atención del Estado parte la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas de protección social para todos y recomienda al Estado parte que:**

a) **Considere la posibilidad de celebrar consultas con familias, niños y organizaciones de la sociedad civil que se ocupen de los derechos del niño sobre la cuestión de la pobreza infantil, con miras a afianzar las estrategias y medidas para el ejercicio de los derechos del niño;**

b) **Amplíe el alcance de las medidas para llegar a grupos en situación desaventajada que actualmente no tienen servicios mejorados de agua y saneamiento, especialmente en las comunidades rurales y remotas, a los centros de salud y a las escuelas, con inclusión de los centros de educación para la primera infancia;**

- c) **Tenga en cuenta las necesidades específicas de los niños con discapacidad y las niñas en las medidas para mejorar el acceso a agua, saneamiento y servicios e instalaciones de higiene y su utilización.**

H. Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 a 31)

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales

46. El Comité toma nota de la promulgación y aprobación de diversas políticas y leyes, como la Ley de Educación de 2014, la Política y Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2010-2020, la Política sobre la Atención y Educación de la Primera Infancia 2017-2021 y las Normas Mínimas de Calidad de los Servicios, de 2017, que la acompañan, y la Política Lingüística Nacional de 2012, así como el aumento de las tasas de matrícula en los últimos años. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que:

- a) La educación no es obligatoria;
- b) Las tasas de matrícula en la educación para la primera infancia y la educación secundaria son bajas, a pesar de que últimamente han subido;
- c) Existen diferencias de género en los ciclos primario y secundario y las tasas de matrícula de los niños son más bajas;
- d) Hay informes sobre niños que ingresan al primer año de escuela primaria a una edad mayor que la normal;
- e) Existen disparidades en la calidad de la educación y el acceso a ella entre las zonas urbanas y remotas y faltan internados suficientes para estudiantes, especialmente niñas.

47. **Con referencia a su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación y tomando nota de la meta 4.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad, el Comité recomienda al Estado parte que:**

- a) **Haga gratuita y obligatoria la educación primaria;**
- b) **Ponga en práctica las recomendaciones de la revisión de la Política Nacional de la Infancia (2007-2014) y, en particular, aumente el número de maestros diplomados y proporcione más fondos para la educación;**
- c) **Siga adoptando medidas a fin de aumentar la matrícula en las escuelas para la primera infancia y secundarias;**
- d) **Analice las causas profundas por las cuales la matrícula de niños es más baja en la enseñanza primaria y secundaria y tome medidas adecuadas para rectificar la situación;**
- e) **Establezca programas acelerados y facilite el acceso a programas de educación no escolar para los niños que no asisten a la escuela a la edad normal y no han completado aún el ciclo primario;**
- f) **Tome medidas para asegurar el acceso igualitario a una educación de buena calidad en todas las provincias, especialmente en las zonas remotas y, entre otras cosas, establezca un mayor número de internados para estudiantes, especialmente niñas;**
- g) **Establezca un mecanismo de seguimiento para que los centros de la primera infancia pongan en práctica las normas necesarias y tengan indicadores de progreso.**

I. Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) a d) y 38 a 40)

Explotación económica, incluido el trabajo infantil

48. El Comité observa con profunda preocupación que el Estado parte no ha avanzado en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, le preocupa en particular que:

- a) No exista una política relativa al trabajo infantil ni un programa social dirigido a prevenirlo y a prestar apoyo a los niños que trabajan;
- b) No se haya aprobado aún una lista de trabajos infantiles peligrosos, como se exige en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, de 1999 (núm. 182);
- c) Persiste el problema de los niños que venden periódicos en la calle, trabajan en la agricultura y no asisten a la escuela;
- d) No existe un mecanismo que pueda recibir con eficacia denuncias de casos de explotación de niños, hacer un seguimiento de ellas e investigarlas.

49. El Comité insta al Estado parte a que:

- a) **Formule y apruebe una política sobre trabajo infantil y confeccione una lista de trabajos infantiles peligrosos;**
- b) **Tome las medidas que sean necesarias para que ningún menor de 18 años de edad desempeñe un trabajo peligroso y establezca programas sociales que apunten a la erradicación del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas;**
- c) **Determine en qué condiciones los niños pueden desempeñar trabajos ligeros, como en la agricultura, y el número de horas que pueden dedicar a ello;**
- d) **Estreche la coordinación a nivel nacional por conducto de mecanismos tales como el Comité Nacional de la Infancia y otros comités de derechos humanos;**
- e) **Establezca un mecanismo específico que pueda recibir, supervisar e investigar denuncias de casos de explotación de niños y haga que los niños cobren mayor conciencia de ella.**

Administración de la justicia juvenil

50. El Comité acoge complacido la modificación de la Ley de Servicios Penitenciarios que amplía a los 18 años la definición de menor. No obstante, el Comité observa con profunda preocupación que:

- a) No existe aún una ley relativa a la administración de la justicia juvenil;
- b) La edad mínima para la responsabilidad penal está fijada en los 10 años y es muy baja;
- c) El Código Penal dispone que la detención constituya un último recurso únicamente en el caso de los menores de 16 años;
- d) Es necesario capacitar más a la policía en relación con los procedimientos operativos estándar y la competencia para aplicarlos.

51. Con referencia a su observación general núm. 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, el Comité insta al Estado parte a que armonice plenamente esa justicia con la Convención y otras normas aplicables. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que:

- a) **Apruebe legislación sobre la administración de la justicia de menores y se asegure de que los menores de 18 años de edad estén protegidos por las salvaguardias previstas en el Código Penal;**

b) Establezca procedimientos y tribunales especializados de menores con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, designe jueces especializados y otros funcionarios para ellos y se asegure de que reciban instrucción y formación adecuadas;

c) Eleve la edad mínima de responsabilidad penal de conformidad con las normas internacionales aceptadas;

d) Incorpore en el actual programa de formación para la policía la protección del niño y procedimientos operativos estándar específicos e instituya un sistema de gestión basada en el desempeño para que los miembros tengan que rendir cuentas de la forma en que aplican sus conocimientos y su competencia.

J. Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones

52. El Comité recomienda al Estado parte que, a fin de hacer aún más efectivos los derechos del niño, ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones.

K. Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos

53. El Comité recomienda al Estado parte que, a fin de hacer aún más efectivos los derechos del niño, considere la posibilidad de ratificar los siguientes instrumentos fundamentales de derechos humanos en los que todavía no es parte:

a) La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial;

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

c) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

d) La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

e) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

L. Cooperación con órganos regionales

54. El Comité recomienda al Estado parte que coopere con, entre otros, la Comisión de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental sobre la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y los Niños.

IV. Aplicación y presentación de informes

A. Seguimiento y difusión

55. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas apropiadas para que las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales se lleven plenamente a la práctica. También recomienda que los informes combinados segundo a cuarto, las respuestas escritas a la lista de cuestiones y las presentes observaciones finales se difundan ampliamente en los idiomas del país.

B. Mecanismo nacional para la presentación de informes y el seguimiento

56. El Comité recomienda al Estado parte que siga reforzando el Comité Nacional de Derechos Humanos, mecanismo nacional para la presentación de informes y el seguimiento.

C. Próximo informe

57. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos combinados quinto a séptimo a más tardar el 5 de febrero de 2022 e incluya en ellos información sobre el seguimiento que haya dado a las presentes observaciones finales. El informe debe ajustarse a las directrices armonizadas del Comité para la presentación de informes relativos a la Convención aprobadas el 31 de enero de 2014 (CRC/C/58/Rev.3) y no debe exceder de 21.200 palabras (véase la resolución 68/268 de la Asamblea General, párr. 16). En caso de que un informe sobrepase la extensión establecida, se pedirá al Estado parte que lo abrevie con arreglo a la mencionada resolución. Si el Estado parte no puede revisar y presentar de nuevo dicho informe, no podrá garantizarse su traducción para que lo examine el órgano del tratado.

58. El Comité invita igualmente al Estado parte a que presente un documento básico actualizado, que no exceda de 42.400 palabras, de conformidad con los requisitos para el documento básico común establecidos en las directrices armonizadas sobre la elaboración de informes en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, lo que incluye las directrices para un documento básico común y para los informes específicos de cada tratado (véase HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I) y el párrafo 16 de la resolución 68/268 de la Asamblea General.
